RECOMENDACIÓN No. 13/2021

Síntesis: Una persona argumentó que fue detenida sin razón aparente, y que agentes pertenecientes a la Policía Municipal de Juárez lo golpearon, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público, en sucesos ocurridos el día 21 de agosto de 2019.

De acuerdo con la naturaleza de los señalamientos invocados, la Comisión desarrolló una investigación de las imputaciones realizadas, por lo que una vez agotada la indagatoria, se desprendieron evidencias que permitieron concluir a este organismo que en los hechos analizados, existió una violación a los derechos fundamentales de la persona quejosa, específicamente los concernientes a su libertad e integridad personal, mediante actos injustificados de molestia a su libertad personal y el uso excesivo de la fuerza, que derivaron en tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del quejoso.

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia en México.”

“2021, Año de las Culturas del Norte”

Oficio No. CEDH:1s.1.096/2021

Expediente: JUA-SGR-288/2019

RECOMENDACIÓN No. CEDH:5s.1.013/2021

Visitador Ponente: Lic. Santiago González Reyes

Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2021

C. HÉCTOR ARMANDO CABADA ALVÍDREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ

PRESENTE.-

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación a la queja presentada por “A”¹, radicada bajo el número de expediente JUA-SGR-288/2019; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6 y 12, del Reglamento Interno de esta Comisión, procede a resolver lo conducente, según el estudio de los siguientes:

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este Organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 8, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 3, fracción XXI, 68, fracción VI, 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y demás aplicables, y de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información que obra dentro del expediente de queja en resolución.

I.- ANTECEDENTES:

1. Con fecha 29 de agosto de 2019 se recibió el escrito de queja presentado por "A", en el que manifestó lo siguiente:

"... El día 21 de agosto de la anualidad en curso, aproximadamente a la una y media de la mañana, me encontraba dejando a un amigo en su casa, ubicada en "B", después de haber ido juntos a cenar a un bar, cuando él se bajaba de mi vehículo se acercó una patrulla de la policía municipal, mi amigo me preguntó si se quedaba, pero al yo pensar que solo sería una revisión rutinaria le dije que no era necesario, y procedió a adentrarse al fraccionamiento.

De la patrulla, que tengo un poco confuso los últimos dos números, era la "G" o "H", se bajaron dos oficiales, los cuales me preguntaron hacia dónde me dirigía y de dónde venía. Les dije que iba a mi casa y que venía de cenar con un amigo en un bar. Me pidieron que me bajara y que pusiera mis cosas sobre la cajuela, pues me iban a hacer una revisión, además de que también inspeccionaron mi vehículo, a lo que accedí. Cuando terminaron de hacer las revisiones, me preguntaron también qué tan lejos iba, a lo que les respondí que iba para la calle "C", y me dijo: "¿y entonces como le vamos a hacer?", yo le contesté: "no traigo efectivo, si a eso te refieres, pero podemos ir a sacar al cajero", pues yo sólo traía mi tarjeta de débito, y el oficial me respondió: "no ya es mucho show, aparte hay cámaras, mejor te voy a llevar detenido, pues andas ebrio", le argumenté que eso no era cierto, que en todo caso llamara a Tránsito para que hiciera la prueba correspondiente, pero que no era posible que solo por su dicho, me fuera a llevar, el oficial se molestó, y me dijo: "tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo", en eso la oficial le dijo que mejor le hablara al comandante, y así lo hizo, esperamos unos minutos y en eso llegaron otras dos unidades.

De una de ellas se bajó un oficial robusto, de unos treinta y cinco años, a quien le dijeron comandante, nos preguntó qué estaba pasando, y yo tomé la palabra explicándole la situación, y en eso sonó mi teléfono celular, lo dejé sonar una vez, y volvió a sonar, y el comandante se alteró y me preguntó que quién me estaba hablando, le dije que era mi amigo, al que acababa de dejar, y le pregunté si podía contestar, y me dijo que no, le rebatí que por qué no, que él no me podía prohibir contestar mi celular, y en eso él lo agarró y me pidió que lo desbloqueara, le dije que no se lo iba a desbloquear, pues yo tenía derechos, y él no podía invadir así mi privacidad.

El comandante se molestó, me tomó del cuello y me impactó contra la puerta trasera de mi vehículo, y me dijo: “tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo, ¿qué no sabes quién soy yo?”, le respondí que sabía que era el comandante, y me respondió que no me hiciera pendejo. Me soltó y les dijo a los otros oficiales, “chínguenlo”, sentí que me pateaban por detrás de las rodillas, caí de rodillas en el concreto y ahí me sometieron, esposándome, me subieron a la unidad y me llevaron a la Estación Oriente por Villa Íntegra.

Cuando llegamos a la estación, me bajaron de la unidad, y me dijeron que bajara la cabeza, me pusieron una bolsa de plástico negra, y me condujeron a un lugar, en un momento llegamos a un cuartito y pude ver que estaban los dos oficiales del principio y el comandante, un agente al que escuche que le decían “I”, otro de los que llegó con el comandante y otros tres, eran ocho en total.

Lo primero que me dijeron fue que me arrodillara, lo hice y sentí como alguien me jaló la bolsa por la parte de atrás y me dijeron que ahora sí iba a hablar. Me tuvieron unos momentos tratando de asfixiarme con la bolsa, pero yo logré romperla con mis dientes, me la quitaron y me dijeron que no levantara la cabeza, pude ver que la oficial fue por otra bolsa, ésta era transparente y me la volvieron a poner para tratar de ahogarme, por el

forcejeo, ya estaba yo en el piso retorciéndome, volví a poder romperla, y la oficial al darse cuenta, se acercó y con la bolsa aún puesta, me tapó la nariz y la boca, se molestó y me dijo: “no la rompas pendejo, ahora sí ya te llevó la chingada, no sabes quienes somos, te vamos a tirar al Camino Real” y una serie de amenazas e insultos más, mientras me insistían en que desbloqueara el teléfono y les diera el NIP de mi tarjeta, me preguntaban que para quién trabajaba, qué escondía, y porqué no quería desbloquear el teléfono.

Todo el tiempo me estaban pateando, me abrieron las piernas y me golpearon en los testículos tres veces, se subieron a mi espalda y me forzaron los brazos hacia arriba, a pesar de las esposas, me golpearon en el tórax, en la espinilla, y en general me pateaban entre todos. También me pusieron un arma en la cabeza, mientras me amenazaban con que iban a matarme y a tirarme, sin que a ellos les pasara nada.

Cuando me estaban haciendo la palanca en los brazos, escuché como que alguien entró y cesaron los golpes, y se salieron los agentes con esa persona que llegó, de rato volvió la oficial y otro oficial que no había visto, me preguntó la oficial lo que me había pasado, como ya tenía mucho miedo, le respondí que me había caído, y me contestó la oficial, que: “muy bien.”.

Me levantó, me limpiaron, me arreglaron poquito y me cambiaron las esposas, mientras me amenazaban para que no dijera nada, pues ellos sabían mi domicilio, ella me dijo que hasta foto le habían tomado a mi credencial.

Me sacaron y me subieron a otra unidad, que no es en la que llegué, me tuvieron como cuarenta minutos, y escuché que los agentes se acercaban y que otra mujer le gritó a “I”, que: “¿a dónde?”. Le contestó que a Babícora y escuché que se referían al comandante como “J”.

Me llevaron a Babícora y ahí me tomaron fotos y huellas, y luego me pasaron a revisión con la enfermera, y ella me preguntó que porqué iba tan golpeado, y le contesté que los policías me habían golpeado.

De ahí me pasaron a una celda y me tuvieron como media hora, me sacaron de ella y me volvieron a subir a una unidad, les pregunté que a dónde me llevaban, y me dijeron que a Fiscalía, que me iban poner a droga para que viera quien mandaba, yo les insistía en que me devolvieran mi teléfono, y me dijeron que no, que era evidencia.

Llegué a Fiscalía, y me encerraron en los separos, donde duré 48 horas detenido, por supuestamente delitos contra la salud, pues traía cristal y cocaína, para narcomenudeo, no supe exactamente con qué cantidad me cargaron.

Quiero manifestar que mi celular nunca me fue regresado, y era de modelo Samsung Galaxy A20.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que considero que se han efectuado graves violaciones a mis derechos humanos, por lo que solicito la intervención inmediata de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para la investigación de los hechos narrados en el cuerpo de este escrito, y que se abra el expediente correspondiente...". (Sic).

2. En fecha 08 de marzo de 2017, se recibió el informe de la autoridad, mediante el oficio número SSPM-DAJ/NYSV/12796/2019, signado por la licenciada María Guadalupe Mancha Valenzuela, entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, en el cual expuso lo siguiente:

"... Primero.- A fin de dar contestación al escrito de queja, se realizó una búsqueda entre los registros con los que cuenta esta institución, sobre la intervención policiaca que se suscitó respecto a los hechos motivo de la queja, encontrando lo siguiente: En fecha 21 de agosto del año en curso,

los agentes "I" y "K", se encontraban realizando un recorrido de patrullaje y vigilancia sobre la calle "B", momento en el que se percatan de un masculino que se encontraba gritando: "te voy a partir tu madre culero" a otro hombre. Una vez que los agentes observaron que dicho masculino se encontraba insultando al otro sujeto, detuvieron su marcha y descendieron de la misma, pero al percatarse dichos masculinos de la presencia de los policías, de manera repentina empezaron a correr, dándole alcance al masculino (el que gritaba), intentando abordar un vehículo de la marca "L" con matrícula "M", y número de serie "F" el cual se encontraba estacionado sobre dicho cruce. Una vez que se le dió alcance, el masculino se identificó como "A", a quien se le informó que su conducta de insultar a una persona en la vía pública constituía una falta administrativa contemplada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en su artículo 7 fracción II; y una vez realizado lo anterior se le informó que sería presentado ante el juez de barandilla para que calificara su conducta, pero previo a ello, por protocolo de seguridad, se le pidió autorización para realizar una inspección en su persona, al inspeccionarlo, se le localizó: en la bolsa frontal del lado derecho del pantalón que vestía, tres envoltorios de plástico, dos en color verde y uno en color rosa, que contenían una sustancia granulada con las características similares a la metanfetamina, comúnmente conocida como cristal, y un envoltorio de plástico en color rosa, que contenía un polvo blanco con las características similares a la cocaína. Una vez realizada la inspección y ante el descubrimiento de dichos indicios, se le informó a "A" que su conducta constituía la probable comisión de delitos contra la salud, y que sería puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que previa lectura de sus derechos, se procedió a su formal detención.

Segundo.- La intervención realizada por los agentes pertenecientes a esta institución, se realiza en cumplimiento a lo establecido en los artículos 41, y 43, fracciones VI y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, relativo a las atribuciones reservadas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las cuales son la prevención de

delitos y/o faltas administrativas; la intervención se realizó sin transgredir derechos, tratando de hacer prevalecer la seguridad y tranquilidad social.

Tercero.- Los agentes al realizar su intervención, en ningún momento violentaron los derechos humanos, ya que se realizó por una falta administrativa, misma que se encuentra contemplada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, por lo que se justifica la intervención policial de acuerdo a las atribuciones de los agentes de seguridad pública; dicha intervención derivó en la detención de "A", se realizó por un delito flagrante y bajo los supuestos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de los indicios localizados en su persona.

Cuarto.- Ahora bien, relativo a lo manifestado por el quejoso, respecto a que fue objeto de malos tratos, me permito señalar, que en el certificado médico que le fue practicado en esta institución, se especifica que al momento de la revisión física, sí presentaba lesiones, las cuales no son coincidentes con la mecánica de los hechos narrados por el quejoso en su escrito, sino que dichas lesiones, coinciden con la aplicación de los candados de mano; además se certificó el uso de bebidas embriagantes, en este sentido, tenemos que está científicamente comprobado que el alcohol inhibe las funciones de la región frontal del cerebro, por lo que disminuye la memoria, la capacidad de concentración, el autocontrol, entre otras.

Lo que deja de manifiesto el certificado médico, es que no existió el empleo de fuerza excesiva durante su detención, menos aún que se empleara tortura o el uso excesivo de la fuerza pública, por lo que es poco creíble lo vertido por el quejoso.

Esta Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala que en ningún momento incurrió en alguna violación a los derechos humanos, por el contrario, se realizaron las acciones pertinentes y se actuó bajo los

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se considera que no se actualiza violación alguna, ya que los policías de esta Secretaría en ningún momento violentaron los derechos de "A".

Se anexa al presente, el oficio número SSPM/CGP/8178/2019, suscrito por el licenciado Luis Ángel Aguirre Rodríguez, coordinador general de policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con veinte anexos.

Por lo anteriormente expuesto a usted, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, atentamente solicito:

Unico.- Tenerme dando cabal cumplimiento al informe solicitado por esa H. Comisión.

En atención a lo narrado en líneas precedentes solicito que se valore la información proporcionada y en los términos de los artículos 32 y 43 de la ley de la materia, se declare improcedente la presente queja, por no actualizarse ni acreditarse las supuestas violaciones reclamadas por "A" ...". (Sic).

II.- EVIDENCIAS:

- 3.** Escrito de queja presentado por "A", de fecha 29 de agosto de 2019, cuyo contenido fue transcrito en el punto número 1 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Fojas 2 a 4).

- 4.** Acta circunstanciada de fecha 30 de agosto de 2019, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, visitador general de esta Comisión, mediante la cual hizo constar que recibió cuatro fotografías de "A", que fueron tomadas por la licenciada Laura Elizabeth de Anda Ramírez, también visitadora general, en las cuales se aparecían diversas lesiones que presentó el quejoso en sus muñecas, hombro, cuello, rodilla y parte inferior de las piernas. (Fojas 9 a 11).

5. Oficio número JUA-SGR-270/2019 de fecha 30 de agosto de 2019, signado por el licenciado Santiago Gonzalez Reyes, visitador general de esta Comisión, mediante el cual notificó a la Fiscalía General del Estado que de la queja que ahora se resuelve, se desprendían actos de posible tortura, por lo que lo hacía de su conocimiento conforme a lo dispuesto por los artículos 7 bis y 9 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua. (Fojas 12 y 13).
6. Oficio número JUA-SGR-269/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, signado por el licenciado Santiago González Reyes, visitador general de esta Comisión, mediante el cual solicitó el informe de ley al director de Seguridad Pública Municipal de Juárez. (Fojas 14 y 15).
7. Oficio número SSPM/DAJ/NYSV/12796/2019, recibido el día 13 de septiembre de 2019, signado por la licenciada María Guadalupe Mancha Valenzuela, entonces directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mediante el cual remitió el informe de ley solicitado por esta Comisión, mismo que fue transcrito en el punto número 2 del apartado de antecedentes (fojas 16 y 17), al que acompañó los siguientes anexos:
 - 7.1. Copia simple del oficio número S.S.P.M./C.G.P./8178/2019 de fecha 07 de septiembre de 2019, signado por el licenciado Luis Daniel Aguirre Rodríguez, entonces coordinador general de policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual remite a la directora de asuntos jurídicos de dicha dependencia, copia simple del oficio DO/JOP/1282/09/2019, al cual se anexaron copias simples de las actas de puesta a disposición de "A". (Fojas 18 y 19).
 - 7.2. Copia simple del acta de entrega del imputado al Ministerio Público, Acta de Aviso de la Policía a la Unidad Especializada de hechos Probablemente Delictuosos y Reporte de Incidentes de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, e Informe Policial Homologado, todos de fecha 21

de agosto de 2019, signados por los agentes “I” y “K”. (Fojas 20 y 21 a 38 respectivamente).

8. Acta circunstanciada, de fecha 19 de septiembre de 2019, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mediante la cual hizo constar que notificó el informe de ley al quejoso. (Foja 40).
9. Acta circunstanciada de fecha 30 de septiembre de 2019, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes (foja 42), mediante la cual hizo constar que recibió por parte del impetrante los siguientes documentos:
 - 9.1. Escrito de contestación al informe de la autoridad elaborado por el quejoso, de fecha 30 de septiembre de 2019. (Fojas 43 y 44).
 - 9.2. Copia simple de la denuncia interpuesta por “A” en la Fiscalía General del Estado, el día 23 de agosto de 2019, con motivo de los hechos que dieron origen a la queja interpuesta en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (Fojas 45 a 52).
10. Acta circunstanciada, de fecha 05 de octubre de 2019, mediante la cual el visitador ponente hizo constar el testimonio de “N”. (Foja 53).
11. Acta circunstanciada, de fecha 05 de octubre de 2019, elaborada por el licenciado Santiago González Reyes, en la que hizo constar que recibió una fotografía proporcionada por el quejoso, quien señaló que fue tomada por “N” al momento de su detención. (Fojas 55 y 56).
12. Dictamen en materia de psicología especializado realizado a “A”, de fecha 14 de octubre de 2019, elaborado en vía de colaboración por el licenciado Damián Andrés Díaz García, a petición de esta Comisión. (Fojas 61 a 66).

- 13.** Oficio número UARODH/200/2020 de fecha 04 de febrero de 2020, signado por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual informó a esta Comisión, que en atención al oficio número JUA-SGR-270/2019 emitido por este organismo, se inició una investigación por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, en la que aparece como ofendido “A”, dando inicio a la carpeta de investigación número “D”, en la que se aplicará al impetrante el Protocolo de Estambul. (Fojas 68 a 71).
- 14.** Oficio número CEDH:10s.1.11.228/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado por el doctor Armando Tomás Castillo Peña, dirigido al visitador ponente, mediante el cual realizó una impresión diagnóstica de las lesiones de “A” en vía de colaboración a esta Comisión. (Foja 82).
- 15.** Acta circunstanciada, de fecha 28 de agosto de 2020, elaborada por el visitador ponente, mediante la cual hizo constar que sostuvo una comunicación telefónica con “A”, en la cual éste se desistió de la queja, únicamente en relación a la sustracción de las pertenencias que tenía en el vehículo que tripulaba al momento de ocurrir los hechos, afirmando que continuaría con su queja en relación al resto de los derechos humanos que consideró violados en su perjuicio. (Foja 85).
- 16.** Oficio número CM/1471/2020 de fecha 02 de octubre de 2020, signado por el licenciado Gustavo Méndez Aguayo, contralor municipal de Ciudad Juárez, por medio del cual allegó a esta Comisión copias cotejadas del expediente “E”, relativo a la investigación realizada con motivo de la denuncia interpuesta por “A” en fecha 28 de agosto de 2019 ante la Contraloría Municipal, derivada de los mismos hechos que fueron motivo de queja en este organismo derecho humanista. (Fojas 87 a 138).
- 17.** Oficio número FGE-18s.1/1/1683/2020, de fecha 14 de diciembre del 2020, signado por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, por medio de la cual

envió a esta Comisión, copia simple de la carpeta de investigación número “D”, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por “A”. (Fojas 140-181).

III.- CONSIDERACIONES:

- 18.** Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6, 12 y 84, fracción III, del Reglamento Interno de este organismo.

- 19.** Según lo establecido en los artículos 39 y 40, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente, por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas han violado o no derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra carta magna para que, una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

- 20.** Antes de entrar al estudio de las probables violaciones a derechos humanos, este organismo precisa que los actos y omisiones a que se refiere la presente resolución, atribuidos a personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, se establecen con pleno respeto de sus facultades legales, sin invadir las atribuciones conferidas a esas autoridades y sin que se pretenda interferir en la función de prevención de los delitos o en la persecución de los probables responsables; por el contrario, el Estado a través de sus instituciones públicas, debe cumplir con la obligación de prevenir la comisión de conductas delictivas en el

ámbito de su competencia, para identificar a las personas responsables y lograr que se pongan con inmediatez a disposición de las autoridades competentes, así como proporcionar a las víctimas del delito, un trato digno, solidario y respetuoso, con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

21. Por ese motivo, la presente resolución no constituye un pronunciamiento respecto a la participación y/o responsabilidad de “A”, en los hechos que le imputaron las autoridades competentes, por lo que únicamente se ocupará en determinar si con motivo de los hechos reclamados ante este organismo, se acreditó alguna violación a sus derechos humanos.

22. En ese tenor, tenemos que la controversia se centra en que “A”, reclamó que el día 21 de agosto de 2019 aproximadamente a la 1:30 de la mañana, dejó a su amigo “N” en su casa, después de haber ido juntos a un bar, y que cuando “N” se estaba bajando de su vehículo, se acercó una patrulla de la policía municipal, tripulada por dos oficiales, quienes le preguntaron que de dónde venía y hacia dónde se dirigía, pidiéndole que se bajara del vehículo, a lo cual accedió porque pensó que se trataba de una revisión de rutina, pero que después de hacerle la revisión, le preguntaron que: “¿cómo le iban a hacer?”, a lo que “A” les contestó que no traía efectivo, por lo que los policías le dijeron que mejor lo iban a llevar detenido porque se encontraba en estado de ebriedad, lo cual al decir del quejoso, no era cierto, y que en todo caso le hablaran a los agentes de Vialidad y Tránsito para que le hicieran la prueba correspondiente, cuestionamiento que de acuerdo con el dicho del impetrante, molestó a los agentes de policía, quienes le hablaron a otras dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con quienes después de discutir acerca del motivo de su detención, también se molestaron y lo comenzaron a golpear, para luego esposarlo y subirlo a una de las patrullas.

23. Continúa narrando “A” que luego lo llevaron a la Estación Oriente, en donde le pusieron una bolsa de plástico negra en la cabeza para asfixiarlo, encontrándose presentes aproximadamente ocho agentes, entre ellos, una persona a la que se dirigían como “O”, profiriéndole una serie de insultos, mientras le insistían que les

desbloqueara su teléfono y les diera el número de identificación personal de su tarjeta de débito; afirmando que todo el tiempo le estuvieron dando de patadas, y que le abrieron las piernas y lo golpearon en los testículos tres veces, le forzaron los brazos hacia arriba estando esposado, y lo golpearon en el tórax y en la espinilla, poniéndole un arma en la cabeza, mientras lo amenazaban con matarlo y tirar su cuerpo.

24. Que después de lo anterior, lo levantaron y lo limpiaron un poco, para subirlo a otra unidad de policía, escuchando que uno de los agentes le gritaba a quien se refirían como “O”, que: “¿a dónde?”, a lo que éste les respondió que lo trasladaran a la Estación Babícora, escuchando que se referían al comandante como “J”; por lo que una vez en la Estación Babícora, en dicho lugar lo pasaron a revisión con la enfermera y ésta le preguntó el motivo por el que estaba tan golpeado, contestándole que habían sido los policías.

25. Posteriormente lo pasaron a una celda, en donde estuvo aproximadamente media hora, y luego lo volvieron a sacar para subirlo a una patrulla, en la que lo llevaron a la Fiscalía General del Estado, porque le dijeron que le iban a poner droga, y que llegando a la Fiscalía, lo encerraron en las celdas, en donde permaneció detenido por 48 horas, por supuestamente haber cometido delitos contra la salud, siendo éste el motivo de su queja.

26. A lo anterior, la autoridad respondió en su informe, que los agentes de la policía municipal se acercaron en un principio con “A”, en razón de que al estar realizando un recorrido de patrullaje, se dieron cuenta que el quejoso insultaba en la vía pública a otra persona, lo que de acuerdo con lo establecido por el artículo 7, fracción II, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, constituía una falta administrativa que ameritaba su presentación ante el juez de barandilla para que calificara su conducta, pero que al hacerle una inspección sobre su persona, le encontraron diversos envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la droga denominada comúnmente como “cristal” y otros con una sustancia similar a la

cocaína, siendo esta la razón por la que decidieron detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público, previa lectura de sus derechos, afirmando la autoridad que en ningún momento se violaron sus derechos humanos, y que las lesiones que presentaba “A”, coincidían con la aplicación de los candados de mano, certificándose además que “A” había consumido bebidas embriagantes, lo que a juicio de la autoridad, inhibía su memoria, su capacidad de concentración y su autocontrol, señalando que en el certificado médico que se hizo de “A”, se demostraba que no había existido tortura o algún exceso en el empleo de la fuerza pública, por lo que a juicio de la autoridad, era poco creíble lo manifestado por el quejoso.

27. Como puede observarse, de las manifestaciones de las partes, se desprenden actos que tienen relación con posibles vulneraciones a los derechos humanos de “A”, concretamente los relacionados con su libertad personal, su integridad y seguridad personal, y sus derechos de propiedad, ya que durante el transcurso del procedimiento, “A” señaló que los agentes de la policía involucrados en los hechos, se apoderaron sin su consentimiento, de diversos bienes que eran de su propiedad, razón por la que, previo a entrar al estudio de las evidencias que obran en el expediente, esta Comisión considera prudente establecer una serie de premisas relacionadas con esos derechos, a fin de establecer el contexto legal en el que sucedieron los hechos, y determinar si la autoridad actuó conforme a lo establecido en la ley.

28. De esta forma, tenemos que el derecho a la libertad personal, puede verse limitado en diversos supuestos, como sucede en el caso de faltas administrativas o delitos, cometidos bajo la figura de la flagrancia, caso en el que, conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona puede detener al indiciado, en el momento en que está cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, caso en el que deberá ponerse sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, para lo cual deberá existir un registro inmediato de la detención.

29. Por su parte, de forma reglamentaria, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los supuestos de la flagrancia, entendiéndose que se actualiza ésta cuando:

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o;

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, de tal manera que para los efectos de la fracción II, inciso b), se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.

30. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los cuerpos de seguridad pública, están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante, para lo cual deberán realizar un registro de la detención, de tal manera que la inspección que realicen los cuerpos de seguridad al imputado, deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el referido Código, y que en ese caso, o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora en la que lo están poniendo a disposición.

31. Por su parte, las fracciones III y VII del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que entre las obligaciones del policía, se

encuentran las de realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, y deberá hacerle saber a la persona detenida, los derechos que ésta le otorga, estando obligados a practicar inspecciones y otros actos de investigación, y reportar sus resultados al Ministerio Público, respectivamente.

32. A nivel local, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, establece en su artículo 7, fracción II, que son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia, faltarle al respeto a las personas en lugares públicos, en especial a los infantes, adultos mayores o personas con discapacidad (sic); falta administrativa que, conforme al diverso artículo 13 del mismo ordenamiento, amerita que la persona infractora sea detenida y presentada en forma inmediata ante el juez, en caso de ser sorprendida en flagrancia.

33. Por lo que hace al derecho a la integridad de las personas, bajo el sistema de protección no jurisdiccional, éste es definido como la prerrogativa que tiene toda persona, a no sufrir actos lesivos en su estructura corporal, física, psicológica o cualquier otra alteración en el organismo, que deje huella temporal o permanente, cause dolores o sufrimientos graves, o se realicen con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero, pues así lo establece el artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus puntos 1 y 2, determinando que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de tal manera que toda persona privada de su libertad, deberá ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.

34. Tal derecho, se encuentra regulado también en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin

motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que deberán ser corregidos por las leyes, y reprimidos por las autoridades.

35. De igual forma, las fracciones I y XIII del artículo 65 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen que para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública, tienen como obligación observar un trato respetuoso con las personas, absteniéndose de todo acto arbitrario y deben velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, respectivamente.

36. Establecidas las premisas anteriores, pasaremos ahora al análisis de la forma en la que ambas partes aseguran que ocurrieron los hechos. Así, tal y como se desprende de los puntos 1 y 2 del apartado de antecedentes de la presente determinación, ambas partes coinciden en que “A” fue detenido en Ciudad Juárez, el día 21 de agosto de 2019, en el cruce de las calles “B”, sin embargo, discrepan en cuanto a las circunstancias en las que ocurrió dicha detención, pues mientras que “A” señaló que no cometió ninguna falta administrativa o algún hecho delictuoso que ameritara su detención o un daño a su integridad física, fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Juárez, informó a esta Comisión, que contrario a lo manifestado por “A”, primero se detuvo momentáneamente al quejoso, por haber cometido una falta administrativa, lo que ameritaba su detención y presentación ante el juez de barandilla, pero que por seguridad, antes de llevarlo ante dicho funcionario, se hizo una inspección de su persona, en donde se le encontraron diversas sustancias coincidentes con las drogas denominadas como “cristal” y cocaína, siendo esta la razón por la que se puso a “A” a disposición del Ministerio Público, negando que se hubiere maltratado al impetrante en alguna forma.

37. Para dilucidar lo anterior, se cuenta en el expediente con el informe de la autoridad, en el que señaló que al estar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal patrullando en “B”, se percataron de que una persona insultaba a otra con

palabras altisonantes, por lo que decidieron descender de la unidad que patrullaban para abordar a dichas personas, quienes al verlos, comenzaron a correr, pero que se le dio alcance a la persona que gritaba (quien resultó ser “A”), a quien se le comunicó que su conducta constituía una falta administrativa, por lo que sería remitido al juez de barandilla, y que al solicitarle su autorización para realizarle una revisión corporal, se le localizaron lo que al parecer eran sustancias prohibidas y que por esa razón, sería remitido al Ministerio Público, ya que la posesión de dichas sustancias, constituía un delito contra la salud.

38. Del análisis de dicho informe, tenemos que la autoridad pretendió justificar el primer contacto, o acto de molestia con “A”, con motivo de una falta administrativa que presuntamente se encontraba realizando en flagrancia, es decir, insultando a otra persona en la vía pública, lo que ameritaba su detención, sin embargo, de la documentación que envió la autoridad, no se advierte que con motivo de esa falta administrativa, la policía hubiere levantado la boleta de remisión, conforme a lo establecido por el artículo 14 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad, de acuerdo con los documentos que acompañó a su informe, concretamente del acta de hechos que levantaron los aprehensores del quejoso (visible a fojas 21 y 22), se desprende que se llevaron detenido al quejoso, a la estación de policía del Distrito Sur, en donde los agentes “I” y “K” señalaron que iniciaron los actos administrativos correspondientes para la puesta a disposición (sin señalar si se referían al juez de barandilla o al Ministerio Público), sin embargo, lo correcto era que si “A” ya estaba detenido en las celdas de la policía municipal, se realizara la correspondiente boleta de remisión que amparara la detención del quejoso, para que luego el juez de barandilla calificara la falta administrativa correspondiente, y luego se le pusiera a disposición del Ministerio Público por los delitos que presuntamente había cometido, pues así se interpreta del diverso artículo 20 del mismo Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Para mayor ilustración, se transcriben los artículos en cuestión:

“Artículo 14.- Cuando el agente deba presentar en forma inmediata al presunto infractor ante el juez, acompañará por duplicado la boleta de

remisión correspondiente debiendo entregar un tanto al presunto infractor.

La boleta deberá contener por lo menos los datos siguientes:

I. Nombre y domicilio del presunto infractor, así como los datos que lo acrediten;

II. Una relación sucinta de los hechos de la presunta infracción cometida, así como las circunstancias de modo, tiempo, lugar y los demás datos que pudieren interesar al procedimiento;

III. Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere;

IV. Lista de los objetos recogidos, en su caso, que tengan relación con la presunta infracción, y

V. Nombre, número de placa o jerarquía, sector al que está adscrito y firma del agente que hace la presentación, y en su caso, número de vehículo.

(...)

Artículo 20.- Cuando los hechos sean constitutivos de algún delito, el juez se abstendrá de conocer el asunto y pondrá al infractor con las constancias y elementos de prueba correspondientes a disposición de la autoridad competente para que se ejercite la acción penal”.

39. Por esa razón, al no haber aportado la autoridad documentación soporte con la que pudiera haber demostrado, que al principio se detuvo al quejoso por una falta administrativa, incumplió con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por lo que luego entonces, deben tenerse por ciertas las afirmaciones del quejoso, en el sentido de que en un inicio la restricción a su libertad personal, se dio de manera injustificada, al no existir en el expediente, indicios que evidencien lo contrario, lo cual se ve reforzado con la testimonial de “N”, misma que se analizará mas adelante.

40. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que respecto a los actos de molestia de la autoridad, relacionados con la restricción de la libertad personal de las personas, ha establecido tres niveles de contacto que deben observarse:

“DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA.

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediatez entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera

jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía²”.

- 41.** Tal y como se desprende de la referida tesis, resulta claro que en el caso, la autoridad no justificó su intervención, pues si bien es cierto que ésta, mencionó en su informe que sus agentes presenciaron la comisión en flagrancia de una falta administrativa, se reitera que la autoridad, no acompañó la documentación que le hubiera dado soporte a sus afirmaciones, y por lo tanto, la mera afirmación

² Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2008638. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Penal. Tesis: 1a. XCIII/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II. Página 1096. Tipo: Aislada

de la autoridad en el sentido de que detuvo primeramente al quejoso, porque presuntamente había cometido una falta administrativa, no puede crear la convicción en este organismo de que la primera interacción con el quejoso, se hubiera dado conforme a los tres niveles de contacto señalados en el criterio señalado en el párrafo que antecede, ya que no acreditó empíricamente y de manera objetiva la existencia de dicha falta, misma que pudo haberse acreditado con la boleta de remisión correspondiente, la cual hubiera dado certeza a lo informado por la autoridad, ya que en dicha boleta debe establecerse el nombre y domicilio del presunto infractor, una relación sucinta de los hechos de la presunta infracción cometida, así como las circunstancias de modo, tiempo, lugar y los demás datos que pudieren interesar al procedimiento, el nombre y domicilio de los testigos si los hubiere, la lista de los objetos recogidos, en su caso, que tengan relación con la presunta infracción, y el nombre, número de placa o jerarquía, sector al que está adscrito y firma del agente que hace la presentación, y en su caso, número de vehículo.

42. No se pierde de vista que el acta de aviso de la policía especializada por hechos probablemente delictuosos y reporte de incidentes de faltas al reglamento de policía y buen gobierno que levantaron los agentes que detuvieron al quejoso (visible a fojas 21 y 22), reúne algunos de los requisitos mencionados en el párrafo que antecede, sin embargo, aún y cuando la autoridad hubiera considerado a dicha acta, como la boleta de remisión (en la que dicho sea de paso, nunca se establece que sea dicho documento), lo cierto es que en los espacios en los cuales se establece la causa de la detención de “A”, concretamente en el espacio que dice *“Tipo de incidente: Falta (s) [] Delito (s) []”*, únicamente se encuentra marcado con una equis, el espacio de *“Delitos (s) [X]”*, sin que ocurra lo mismo en el espacio que dice *“Falta (s) []”*, no obstante que en esa misma acta, se observan instrucciones para que los agentes marquen ambas, en caso de que concurren faltas administrativas y la comisión de delitos; dichas instrucciones, a la letra dicen *“En caso de haber faltas, especificar en el párrafo 1, en caso de delitos llenar el párrafo 2, y si se da el caso de ambos incidentes, llenar 1 y 2”*, lo que confirma las consideraciones

realizadas por esta Comisión, en el sentido de que la supuesta falta administrativa cometida por “A”, no fue asentada por la autoridad en la documentación que envió. Para mayor ilustración, se hace una reproducción de la parte conducente, habiéndose cubierto únicamente los datos personales de los involucrados con claves respectivas, a fin de protegerlos:

21

ACTA DE AVISO DE LA POLICÍA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS Y REPORTE DE INCIDENTES DE FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

LUGAR DE LA INTERVENCIÓN	"B"		FECHA	21/08/2019				
TIPO DE INCIDENTE			FALTA(S) []	DELITO(S) [X]				
EN CASO DE HABER FALTAS ESPECIFICAR EN EL PÁRRAFO 1, EN CASO DE DELITOS LLENAR EL PÁRRAFO 2, Y SI SE DA EL CASO DE AMBOS INCIDENTES LLENAR 1 Y 2								
AGENTE	"I" "K"		NÚMERO EMPLEADO	"Q" "R"	UNIDAD	"S"	SECTOR	"U"
POLICÍA Y			SE ATENDIÓ POR VÍA		DIRECTA [X]			RADIO OPERADOR []
OFICIAL			DISTRITO	Oriente	FRACCIONAMIENTO	"T"		
1. FALTA(S) COMETIDA(S):								
2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 132 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NOS PERMITIMOS INFORMAR A USTED LOS SIGUIENTES HECHOS:								
NARRATIVA DE LOS HECHOS: (QUE, QUIEN, CUANDO, DONDE, COMO, PORQUE, CON QUE)								

43. A lo anterior, se suma el testimonio de “N” de fecha 05 de octubre de 2019 (visible en foja 53 del expediente), quien señaló que el día de los hechos, “A” le hizo el favor de llevarlo a su casa, después de que habían cenado en un bar que se llama “P”, y que al llegar a su domicilio, mismo que se encontraba en un fraccionamiento privado, le dijo a “A” que no había necesidad que lo dejara adentro de dicho fraccionamiento, por lo que cuando se bajó del automóvil de “A”, se percató que venía una patrulla de la policía municipal, observando previamente que iban a detener a otro automóvil, pero cuando vieron que él se bajó, se regresaron para detenerlos a ellos, pero “N” logró cruzar la calle, y se percató que “A” avanzó con su automóvil unos 10 o 15 metros, y que en ese momento le prendieron las torretas, observando que lo pararon y viendo como un policía le estaba gritando a “A”, llegando dos patrullas más que rodearon su automóvil, lo que concuerda con el acta de hechos elaborada por los agentes captadores cuando señalaron que pidieron el apoyo de la unidad número “V” para que trasladaran el vehículo de “A”, lugar en el que estuvieron como media hora,

asegurando que cuando llegaron a casa de “N” no traían drogas ni nada ilegal, y que incluso no habían tomado bebidas embriagantes

44. Lo dicho por “N”, coincide con lo señalado por “A” en su queja y en la contestación que realizó al informe de la autoridad, cuando señaló que en ningún momento insultó a nadie, y que la persona a la que describía la autoridad, era su amigo “N”, a quien acababa de dejar afuera de su fraccionamiento, quien se retiró y cruzó la calle caminando, sin que los policías interrumpieran su marcha y quien se mantuvo detrás de la reja de su colonia, atestiguando los hechos, por lo que resulta claro para esta Comisión, que los dichos del quejoso en cuanto a la forma en la que primeramente fue abordado por la autoridad, guardan mayor coincidencia con la evidencia que se ha analizado hasta este punto, que con la información proporcionada por la autoridad.

45. A continuación, se procederá a analizar las cuestiones relacionadas con los derechos a la integridad y seguridad personal de “A”.

46. Al respecto, de acuerdo con la mecánica de los hechos, tenemos que después de que los agentes de policía le dijeron a “A” que se lo llevarían detenido, éste se quejó con ellos de que no existía ninguna razón para hacerlo, pero que acto seguido los policías le dijeron que se lo iban a llevar detenido, porque supuestamente se encontraba en estado de ebriedad, a lo cual el quejoso les respondió que no era cierto y que en todo caso le correspondía a las autoridades de tránsito determinarlo, lo cual molestó a los agentes y determinaron llamarle a un comandante, quien llegó junto con otras dos unidades de policía.

47. Continúa señalando el quejoso, que dicha persona era de complexión robusta y de aproximadamente 35 años de edad, misma que se molestó con el quejoso, después de argumentarle éste sus razones para no ser detenido, por lo que dicha persona lo tomó del cuello y lo impactó contra la puerta trasera de su vehículo, diciéndole que no le iba a decir como hacer su trabajo, y que cuando lo soltó, le dijo a los demás policías: “chínguenlo”, sintiendo cómo lo pateaban por detrás

de las rodillas, por lo que cayó al suelo y ahí lo sometieron, esposándolo, para luego subirlo a una unidad de policía y llevarlo a la Estación Oriente, en donde afirma que le pusieron una bolsa de plástico negra en la cabeza, con la cual pretendieron asfixiarlo en varias ocasiones, estando presentes dos oficiales, el comandante, un agente al que le decían “O” y cuatro personas más, quienes lo insultaban y lo estuvieron pateando todo el tiempo, abriéndole las piernas para golpearlo en los testículos en tres ocasiones, y que también se subieron a su espalda y le forzaron los brazos hacia arriba estando esposado, golpeándolo también en el tórax y en la espinilla, señalando que también le pusieron un arma en la cabeza, mientras lo amenazaban con matarlo.

48. Que después de que lo arreglaron un poco, lo subieron nuevamente a una patrulla y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, en donde estuvo detenido 48 horas, supuestamente por delitos contra la salud, señalando que nunca le regresaron su celular, aunque posteriormente, según se verá mas adelante, el quejoso se desistió de queja en lo relacionado con sus pertenencias.

49. En relación a lo anterior, tenemos que en cuanto a los golpes que el quejoso refirió que le fueron infligidos por los agentes captores, se cuenta en el expediente con el certificado médico emitido por el doctor adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elaborado el día 21 de agosto de 2019 (visible en foja 164), en el cual asentó que “A”, presentó al momento de su revisión médica, hematomas en hombro derecho, escoriaciones en muslo derecho, hematomas en pierna izquierda, hematoma en costado derecho y escoriaciones en pantorrillas; lesiones que concuerdan con las que a simple vista se aprecian en el cuerpo del quejoso, en las fotografías que de él tomó la licenciada Laura Elizabeth de Anda Ramírez (visibles a fojas 10 y 11), visitadora general de este organismo, el día 29 de agosto de 2019 (es decir, ocho días después de que ocurrieron los hechos), en las cuales se observa que “A” contaba con diversas lesiones en sus muñecas, hombro derecho, cuello, rodilla izquierda y en su pantorrilla izquierda.

- 50.** Asimismo, se cuenta con la opinión del doctor Armando Tomás Castillo, quien a petición de esta Comisión, se solicitó su apoyo para que realizara una evaluación de las lesiones de “A”, para lo cual se le pusieron a la vista las fotografías que se señalan en el punto que antecede y la narración de los hechos realizada por “A”, por lo que en opinión de dicho médico, las lesiones de “A” se encontraban en la parte superior del tórax y en la región supraclavicular, observando también una equimosis por lesión contusa en el hombro derecho, diversas lesiones epidérmicas por contusión en ambas rodillas, con hematomas y equimosis en tercio distal del músculo izquierdo, equimosis en la pierna izquierda, lesiones dermo epidérmicas en tercio distal de ambos antebrazos, con zonas que ocupaban de manera circular zonas equimóticas, causadas por presión externa, según consta en el oficio de fecha 20 de agosto de 2020, que envió a este organismo (visible a foja 82 del expediente).
- 51.** Por último, se cuenta con el informe médico de integridad física y toxicomanía de “A” (visible a foja 166 del expediente), elaborado por la doctora María Guadalupe Ávila Ávila, adscrita al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, el día 21 de agosto de 2019, en el que determinó que “A”, contaba con diversas lesiones en su cuerpo, consistentes en equimosis rojizas en la región anterior del cuello, una equimosis violácea en el hombro derecho y el izquierdo, eritemas circulares en ambas muñecas, y diversas equimosis rojizas en el abdomen.
- 52.** Como puede apreciarse de los certificados médicos que se hicieron del estado físico de “A”, las lesiones presentaba en su cuerpo, conciden con las éste dijo haber recibido, cuando señaló que fue golpeado por sus captores en el tórax y en la espinilla, y que le forzaron los brazos hacia arriba estando esposado, con lo cual ha quedado demostrado que efectivamente “A”, contaba con diversas lesiones al momento de ser ingresado a las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, así como al momento en que fue puesto a disposición del Ministerio Público, de tal manera que solo resta por dilucidar, si dichas lesiones fueron consecuencia del uso legítimo o excesivo de la fuerza empleado en contra de “A” cuando fue detenido, o si tuvieron otro origen.

- 53.** Al respecto, la autoridad manifestó en su informe, que si bien el quejoso presentaba lesiones, señaló que éstas, no eran coincidentes con la mecánica de los hechos narrados por “A” en su queja, y que dichas lesiones coincidían con la aplicación de candados de mano, además de que se había certificado el uso de bebidas embriagantes, lo que a su juicio, inhibía las funciones de la región frontal del cerebro y disminuía la memoria, así como la capacidad de concentración y el autocontrol, afirmando que en el caso, como quedaba de manifiesto en los certificados médicos, no había existido el uso de la fuerza excesiva durante la detención de “A”, y menos aún que se había empleado la tortura en su contra, restándole credibilidad a lo manifestado por “A”.
- 54.** De acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, en cuanto a las lesiones que presentó el quejoso, esta Comisión considera que ante la admisión de la autoridad de que éste ya había llegado lesionado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego entonces, debe tenerse por cierto que las lesiones que presentaba “A”, fueron causadas por los agentes de la policía municipal que lo detuvieron, y aunque la autoridad pretendió justificarlas argumentando que las lesiones coincidían con la aplicación de candados de mano, este organismo considera que si bien es cierto que “A” presentó lesiones en sus muñecas que son compatibles con la aplicación de candados de mano, cierto es también, que la explicación de la autoridad, no es suficiente para justificar el resto de las lesiones que presentó “A” en otras partes de su cuerpo, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad argumentó en su informe, que no se había empleado la fuerza excesiva en su contra, y que en el informe del uso de la fuerza (visible en foja 26 del expediente), únicamente se estableció que existió una resistencia pasiva de “A” al arresto, empleándose la fuerza de manera presencial y a través de la verbalización y el control de contacto, en el cual también se asentó que con motivo del uso de la fuerza, no hubo personas lesionadas o fallecidas (según consta en foja 27 del expediente).

55. De ahí que este organismo considere que la autoridad, no proporcionó una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, y no logró desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante los elementos probatorios adecuados, y por lo tanto, debe tenerse por demostrado que en el caso, se verificaron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de “A”, mientras estuvo bajo la custodia de los agentes de la policía municipal.

56. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que *“...la Corte ha señalado que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados³...”*.

57. En el mismo sentido, encontramos lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que establece:

“...Los agentes, bajo su más estricta responsabilidad, velarán porque durante la custodia del detenido se resguarde su integridad y se impidan actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o cualquier otro hecho que la ley señale como delito, o que impliquen una violación grave a los derechos humanos; así como por el cumplimiento de las disposiciones correspondientes de la Ley Nacional del Registro de Detenciones”.

³Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso *Cabrera García y Montiel Flores vs. México*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 134.

58. En el mismo ordenamiento, su artículo 24, establece lo siguiente:

“Artículo 24. Las instituciones de seguridad deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona detenida bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas”.

59. De acuerdo con lo anterior, tenemos que ni del informe rendido por la autoridad ni de los documentos que acompañó al mismo se desprende que el quejoso hubiera opuesto resistencia alguna, que justificara el uso de la fuerza en su contra, e incluso, en el apartado de “narrativa de los hechos” del acta de aviso de la policía especializada de hechos probablemente delictuosos y reporte de incidentes de faltas al reglamento de Policía y Buen Gobierno que levantaron los agentes de policía, se desprende que éstos, le solicitaron autorización a “A” para realizarle una inspección en su persona, debido a los protocolos de seguridad para su traslado, y para verificar que no llevara adherido a él algún objeto, instrumento o producto del delito, a lo cual el antes mencionado accedió de manera voluntaria y otorgó su autorización para que se le realizara dicha inspección.

60. Por lo anterior, esta Comisión concluye que el uso de la fuerza pública, no se ajustó al principio de proporcionalidad establecido en los artículos 270, fracción III y 273, ambos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues si bien es cierto que uno de los objetivos del uso de la fuerza, es hacer cumplir las leyes, ésta debe ser acorde con los derechos a proteger, el objetivo legítimo que se persiga y por último, el riesgo que deben enfrentar los agentes policiales, lo que en el caso no ocurrió, ya que de acuerdo con los hechos que llevaron a la detención de “A” y los documentos que acompañó la autoridad en su informe, no justifican todas las lesiones que de él fueron certificadas en los dictámenes médicos que se le practicaron y que fueron apreciadas por personal de esta Comisión.

61. En esa tesitura, adminiculando lógica y jurídicamente las evidencias analizadas en los párrafos precedentes, se tienen por acreditadas violaciones a los derechos de libertad e integridad personal de “A”, de acuerdo con los hechos que denunció ante este organismo derecho humanista.

IV.- RESPONSABILIDAD:

62. La responsabilidad generada con motivo de las violaciones a los derechos humanos analizadas y evidenciadas, corresponde a los actos realizados en fecha 21 de agosto de 2019, por las y los agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez, quienes contravinieron las obligaciones contenidas en los artículos 7, fracciones I, V y VII, 49, fracciones I, III y VI, y 57, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes a su empleo disponen, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, lo que además implicó incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, mismas que han sido precisadas en los ordenamientos legales citados en este párrafo.

63. Asimismo, al incumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones I, XII, XIII y XXV del artículo 65, y en los diversos 173 y 174, ambos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, relativos a velar por la vida e integridad física y los derechos de las personas, especialmente de las que se encuentran detenidas, resulta procedente instaurar procedimiento administrativo en el que se determine el grado de responsabilidad en que incurrieron los agentes de la Policía Municipal de Juárez que hayan participado en la detención y custodia de “A”, con motivo de los hechos referidos por el impetrante.

V.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO:

64. Por todo lo anterior, se determina que “A” tiene derecho a la reparación integral del daño sufrido en virtud de los hechos que motivaron la apertura de la queja en análisis, en los términos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, y con base en la obligación que tiene el Estado, de reparar las violaciones a los derechos humanos, considerando además que la responsabilidad del mismo, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa, por lo que los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, según lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 178, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
65. Al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 4, 7, fracciones II, VI y VII, 27, 64 fracción VI, 67, 68, 73, fracción V, 74, fracciones I, II y IX, 88 fracción II, 96, 97 fracción II, 106, 110 fracción IV, 111, 112, 126 fracción VII, 130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas; 6, 20, fracción II, 22, fracciones IV, VI, 36, fracción IV, 37, fracciones I y II, y 39, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se deberá reparar el daño de manera integral a “A” por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y que han quedado precisadas en la presente Recomendación, así como su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas. Debiendo tenerse como parámetro para la reparación integral del daño lo siguiente:

a).- Medidas de rehabilitación.

65.1. Las medidas de rehabilitación, pretenden reparar las afectaciones físicas, psíquicas o morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Para esa finalidad, previo consentimiento de la víctima, la autoridad deberá garantizarle a “A”, la atención médica que requiera para alcanzar el máximo grado de rehabilitación posible respecto de las afectaciones sufridas a causa de la violación a su derecho humano a integridad personal, mismas que fueron acreditadas, según las consideraciones realizadas en la presente determinación.

b).- Medidas de satisfacción.

65.2. La satisfacción, como parte de la reparación integral, busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Este organismo de derecho humanista considera, que la presente Recomendación constituye, *per se*, una forma de reparación, como medida de satisfacción.

65.3. Por lo anterior, la autoridad deberá instaurar un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez, que participaron en los hechos materia de la queja de “A”, en el cual deberán tomarse en consideración las evidencias y los razonamientos esgrimidos en la presente determinación, y en su caso imponer las sanciones que correspondan.

c).- Medidas de compensación.

65.4. La compensación, se otorga por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. Por lo que en vista de que en el expediente quedó demostrado que como consecuencia de los hechos en los que se vio involucrado, tuvo que contratar los servicios de defensores privados, según se aprecia en la foja 179 del expediente, la autoridad deberá pagarle al quejoso los gastos y las costas judiciales de sus asesores jurídicos.

d).- Medidas de no repetición.

65.5. Las medidas de no repetición, son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

65.6. Por ese motivo, la autoridad deberá brindar capacitación y adiestramiento a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez, con especial atención a la ética policial, la Ley nacional Sobre el Uso de la Fuerza y los derechos humanos, desde su formación inicial, de manera permanente y continua, tal y como se encuentra previsto en el artículo 287 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de que todos los procedimientos policiales se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a los deberes de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

66. En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo tercero, 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo considera que se encuentran elementos de convicción suficientes para determinar que fueron violentados los derechos humanos de "A", específicamente aquellos relacionados con su libertad personal e integridad personal, por lo que se deberán realizar las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades de las personas servidoras públicas involucradas en la presente resolución, circunstancia por la que resulta procedente emitir las siguientes:

VI.- RECOMENDACIONES:

A usted, **C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ:**

PRIMERA.- Se Inicie, integre y resuelva conforme a derecho, un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas de la Secretaría de

Seguridad Pública de Juárez, que hayan participado en la detención y custodia de “A”, con motivo de los hechos analizados, tomando en consideración las evidencias y los razonamientos esgrimidos en la presente Recomendación, remitiendo a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento, y en su caso, se impongan las sanciones que en derecho correspondan.

SEGUNDA.- Provea lo necesario para que se repare integralmente el daño causado a “A”, con motivo de las violaciones a derechos humanos que han quedado precisadas, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, tomando en consideración lo que se detalla en el capítulo V de la presente resolución.

TERCERA.- En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la aceptación de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas, para lo cual deberá enviar a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se tomen las medidas administrativas necesarias, a fin de que en un término de tres meses, se diseñe un curso de capacitación y adiestramiento de los agentes integrantes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el punto 65.6 de la presente Recomendación.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, primer párrafo de la Ley que rige nuestra actuación, tiene el carácter de pública, y con tal carácter, se divulga en la gaceta de este organismo, emmitiéndose con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por las personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de que se inicien las investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no pretenden en modo alguno desacreditar a las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y personas servidoras públicas ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstas, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia, que conlleven el respeto a los derechos humanos.

Una vez recibida la Recomendación, la autoridad o persona servidora pública de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si la acepta. En ese caso, entregará en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada.

En caso de que se opte por no aceptar la presente Recomendación, le solicito atentamente que en términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida Ley, funde, motive y haga pública su negativa. No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

ATENTAMENTE

NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA
PRESIDENTE

C.c.p.- Quejoso.

C.c.p.- Mtro. Jair Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

*RFAAG